



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 066

Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **JUAN GUILLERMO JARAMILLO CANO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**.

Se le reconoce personería a la Doctora MARÍA CAROLINA JURADO ARANGO con tarjeta profesional No. 307.847 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de Colpensiones, de conformidad con la sustitución de poder otorgada por el Representante Legal Suplente para procesos Especiales de Colpensiones de PALACIO CONSULTORES S.A.S Doctor Fabio Andrés Vallejo Chanci.

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 028 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por el ponente que se consigna enseguida:

Expone el demandante que el día 2 de febrero de 2002, sufrió un accidente de trabajo, siendo reportado al seguro social; que el 16 de mayo de 2005, fue remitido a la ARP Protección laboral donde se le ordenó suministrar medicamentos para el ojo, realizándose la respectiva calificación, arrojando un resultado sin secuelas y con una PCL del 0%; el día 2 de

septiembre de 2015, elevó derecho de petición a Positiva compañía de seguros, buscando el reconocimiento de la pensión de invalidez, entidad que le dio respuesta informándole acerca de los requisitos para el reconocimiento de la prestación. El 21 de abril de 2016, fue calificado por la junta regional de invalidez de Antioquia, dictaminándole una pérdida de capacidad del 67,86% .de origen común con fecha de estructuración del 31 de marzo de 2016, razón por la cual solicitó a Colpensiones la pensión de invalidez, entidad que dio respuesta indicando que el requerimiento había sido enviado a investigación administrativa para efectos de verificar la autenticidad del certificado emitido por la junta regional. Que acudió a la jurisdicción constitucional en enero de 2017, concediéndosele mediante tutela el derecho pensional de manera transitoria.

Con base en los hechos narrados solicitó que se declare que tiene una pérdida de capacidad laboral de origen común del 67,86% con fecha de estructuración del 31 de marzo de 2016, debiéndose declarar que le asiste derecho a la pensión de invalidez, a partir de la fecha de causación del derecho, junto con las mesadas ordinarias y adicionales, más los incrementos de ley, indexación, lo que resulte probado ultra y extra petita y costas procesales.

El apoderado de **COLPENSIONES**, en respuesta a la demanda se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRESCRIPCIÓN, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERESES DE MORA, BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN, COMPENSACIÓN Y LA GÉNÉRICA.

EL **JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** mediante sentencia, ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas al demandante.

Como la sentencia fue adversas a los intereses del demandante y no se interpuso recurso de apelación, se revisará en consulta.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término oportuno anexó los alegatos el abogado de Colpensiones, quien solicitó que se confirme la decisión, ya que el demandante no cumple con las exigencias legales para acceder al derecho pensional.

CONSIDERACIONES

El señor Juan Guillermo Jaramillo Cano nació el 10 de enero de 1961, como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento insertos a folios 11 y 12; fue calificado por la Junta Regional de invalidez el 31 de marzo de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 67.86% de origen común, estructurada el 1 de octubre de 2009 (fls.14 a 18 y 104 a 107). El 2 de septiembre de 2015, solicitó a Positiva Compañía de seguros la pensión de invalidez, la que le dio respuesta en escrito del 14 de agosto de 2015, indicándole los requisitos para continuar con el trámite pensional (fls. 24 a 26). Posteriormente solicitó la pensión de invalidez ante Colpensiones, entidad que en comunicado del 24 de noviembre de 2016, le dice que la administradora debe validar el certificado de invalidez de la Junta Regional. (fl. 25). Mediante sentencia de tutela emitida el 2 de febrero de 2017, le fue amparado su derecho constitucional y como consecuencia de ello se le concedió, de manera transitoria la pensión (fls.27 a 30), razón por la cual Colpensiones dictó el acto administrativo No. 17880 del 23 de marzo de 2017, por medio del cual le dio cumplimiento a la acción de tutela, indicando en la citada resolución que no cumplía con las exigencias legales para acceder a la prestación, pero que cumplía la orden dada (fls. 48 a 55). Para finalizar, en los folios 92 a 96 reposa la historia laboral más actualizada del actor.

Con los antecedentes vistos, se tiene que el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si el demandante cumple con las exigencias de ley o de la jurisprudencia, para obtener el derecho a la pensión de invalidez.

De acuerdo con lo dicho y atendiendo la fecha de estructuración de la invalidez del demandante, consignada en el experticio rendido por la Junta Regional, del 1 de octubre de 2009, la norma que gobierna la prestación es la vigente al momento de la estructuración, ley 860 de 2.003, la cual, en su artículo 1, exige que la persona sea declarada inválida por enfermedad común, esto es, con una pérdida de capacidad laboral del 50% o superior y haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. No existe discusión respecto del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que es superior al 50%, mientras que, en lo que atañe a las semanas, revisando el historial de cotizaciones visibles de folios 92 a 96, se infiere que del 1 de octubre de 2009 al mismo día y mes del año 2006, el señor Juan Guillermo contaba con 4,43 semanas cotizadas al sistema, número que no da lugar al reconocimiento pensional bajo estos presupuesto legales.

No obstante lo anterior, no puede mirarse tan fríamente la situación y de manera tajante decir que no hay lugar a la prestación, desconociéndose los derechos a la seguridad social y a las posiciones jurisprudencias de las altas cortes. De manera que debemos detenernos en el análisis de la situación planteada.

El estado invalidez constituye una disminución física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable pérdida de sus capacidades físicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna.

Y si bien, frente a la pensión de invalidez, es la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral la que determina la normatividad que gobierna el caso, y aunque en algunos asuntos, esta norma se puede desconocer, en aplicación al principio de condición más beneficiosa, hay que aclarar que esto se hace bajo las circunstancias especiales que ha traído consigo la jurisprudencia laboral con la cual se ha aceptado la aplicación ultra activa de normas anteriores derogadas.

Es pertinente traer a colación el precedente jurisprudencial que generó un cambio de posición respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para quienes estructuren su invalidez en vigencia de la ley 860 de 2003. Esta interpretación se plasmó en las sentencias con radicación 35.319 y 41.832 del 8 de mayo de 2012, reiteradas en la sentencia con radicación 38.674 del 25 de julio de 2012.

La tesis así sostenida ha sido innumerables veces refrendada y reiterada por la mayoría de esta Sala de la Corte (SL7275 de 2015, SL7205 de 2015, SL6362 de 2015, SL 6727 de 2015, SL 14842 de 2014 y SL 13883 de 2014, etc.), otorgando la posibilidad de aplicación de la ley 100 de 1993 bajo las prerrogativas del régimen anterior más favorable a quienes fallecen bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003 (pensión de sobreviviente) o la Ley 860 de 2003 (pensión de invalidez), aclarando la H. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, que ello solo procede cuando al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa, el trabajador hubiese cumplido con las exigencias de la norma ya derogada.

Así pues que, teniéndose en cuenta que el afiliado al momento de la estructuración de la invalidez, se encontraba inactivo debió acreditar que cotizo 26 semanas en el año anterior a la fecha de la invalidez y otras 26 semanas dentro del año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, situación reseñada en las sentencia SL2358-2017, Radicación N.º 44596, y SL4650-2017, radicado 45262 ambas del 25 de enero de 2017.

Con las exigencias anteriores, pasaremos a revisar si el demandante cumple a cabalidad con ellas, encontrándonos que al momento de la invalidez el actor se encontraba inactivo en el sistema pensional, y según el aludido reporte de historia laboral contaba con 0 semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de estructuración, esto es 1 de octubre de 2009 a los mismos día y mes del año 2008, y tampoco cumple con las 26 semanas en el año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, ya que tenía 0 semanas; así que para que haya lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa de Ley 860 a Ley 100, se requiere acreditar el cumplimiento de los requisitos de la norma original, esto es artículo 39 Ley 100 antes del

tránsito legislativo, lo que como ya se vio no acontece, luego no es procedente el otorgamiento de la prestación bajo estos presupuestos jurisprudenciales.

Aunado a lo anterior encontramos que el accionante tampoco cumple con las exigencias que traía consigo el Decreto 758 de 1990, al contar el con tan solo 258,59 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994, no siendo posible aplicarle el principio constitucional de la condición más beneficiosa, en virtud de la citada norma.

Para finalizar, si bien es cierto que del dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez, se infiere que el señor Juan Guillermo Jaramillo padece una enfermedad que puede catalogarse como degenerativa, esto es por un accidente cerebro vascular, que lo ha llevado a que sus habilidades físicas cada día vayan desmarojando, lo que lo hace sujeto de especial protección y ello en razón de la protección que le ha dado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Ante circunstancias como la presente, la H. Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia ha respaldado la posibilidad jurídica de establecer la fecha de estructuración de la invalidez con base en elementos de juicio diferentes al concepto de las entidades legalmente instituidas, trayéndose a colación la sentencia con radicación 38.298 de octubre 20 de 2010; además ha sostenido que los jueces del trabajo y de la seguridad social tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. (sentencia de radicación 29.622 de octubre 19 de 2006).

Por otro lado, resulta pacífica la línea jurisprudencial de la H. Corte Constitucional, en la que establece que en los eventos en los que el estado de invalidez de una persona esté asociado al padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico, progresivo o congénito, para el reconocimiento de la pensión de invalidez, se deben tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de

estructuración de la misma, las cuales se asumen como efectuadas en ejercicio de una capacidad laboral residual que, sin ánimo de defraudar el sistema, le permitió seguir trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y funcional de forma permanente y definitiva, diferenciando así la fecha de estructuración formal de la fecha de estructuración material del estado de invalidez. Lo anterior, como garantía efectiva del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones. Al respecto pueden consultarse las sentencias T – 699 A/2007, T – 710/2009; T – 561/2010, T – 163/2011, T – 885 – 2011, T – 485 – 2012, T – 551/2013, T – 827/2014, T – 153/2016, SU 588/16.

Siendo el último día trabajado el hito que determina la estructuración definitiva de la invalidez y la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión en los casos en que el trabajador padece una enfermedad catastrófica- degenerativa, el alto tribunal considera que en ese momento se pierde de forma permanente la capacidad laboral. Ver sentencia T-40 de 2015 la H. Corte Constitucional reiteró su criterio expuesto en las T-962 de 2011, T-886 de 2013, T-294 de 2013, T-43 de 2014, entre otras.

Y si bien en el caso en estudio, se podrían aplicar los anteriores parámetros jurisprudenciales en razón de la enfermedad que padece el señor Jaramillo, debemos tener en cuenta que la fecha de la última cotización al sistema, data del 1 de octubre de 2007 (fl. 96 reverso), y si contamos los 3 años anteriores, esto es hasta el 1 de octubre de 2004, tenemos que el accionante cuenta con 14,72 semanas, número que tampoco le permite acceder al derecho pensional, ya que requería como mínimo 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, por lo que no queda más que confirmar la negativa pensional, absolviéndose a Colpensiones de toda las pretensiones incoadas en su contra.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE** la sentencia revisada en el grado jurisdiccional de consulta, de fecha y procedencia indicadas.

Sin costas en esta instancia.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los Magistrados,



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 065 del 20 de abril de 2021.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>